

Opinión

Al hilo de las medidas económicas frente al Covid-19

Joaquín Maudos y Francisco Pérez

El grado de incertidumbre sobre el impacto económico del Covid-19 es elevado, pero muchas instituciones pronostican caídas del PIB en España muy superiores a las de la anterior crisis, de modo que la situación podría parecerse más a la Gran Depresión que a la Gran Recesión. El FMI estima una caída este año del 8%, y el Banco de España, en el peor escenario, la sitúa por encima del 13%. La forma de la recuperación es una incógnita (aunque se descarta la V) y no sólo es importante la intensidad de la caída en 2020, sino también la duración de la crisis. Para que sea lo menos intensa y lo más breve posible son necesarias dos condiciones: evitar con mejor organización de los recursos sanitarios y la misma responsabilidad social que el repunte de la pandemia obligue a parar de nuevo la actividad; y llevar al máximo posible la cuantía y eficacia de las medidas para sostener el ingreso de las empresas y las rentas de las familias.

Aunque la batería de las medidas implementadas en España es larga, la experiencia de estas semanas justifica insistir en algunas recomendaciones sobre cómo actuar:

- Los ERTE son muy importantes para mantener a flote las empresas, pero en aquellos sectores en los que la caída de la actividad va a ser de más duración (como la hostelería y la restauración) es necesario adecuar su duración al previsible retraso en salida de la crisis de estas actividades, porque de lo contrario pasaremos de ERTE a ERE, destruyendo el empleo de forma irreversible.

- Las ayudas públicas aprobadas se dirigen a los trabajadores afectados por el Covid-19, pero dejan fuera a colectivos vulnerables que no estaban ocupados, a los que hay que proteger para evitar el desplome del consumo y el aumento de la desigualdad: parados de larga duración que han agotado la prestación, personas que han terminado contrato, hogares con niveles de renta por debajo de un mínimo vital, parados que estaban a la espera de conseguir un empleo de temporada de cara a la campaña de verano, jóvenes que llegan al mercado de trabajo, etc. Son colectivos que representan un porcentaje elevado de la población a los que hay que ayudar.

- La burocracia es lenta y hay ayudas aprobadas que aún no se han materializado en ingresos para empresas y familias. Es necesario agilizar los trámites de expedientes, relajando las comprobaciones ex ante que se pueden realizar ex post, contemplando que las ayudas se devuelvan si no se cumplieran las condiciones y esté justificado reclamarlas.

- Los avales públicos son muy importantes para proteger a los bancos hasta un cierto umbral del riesgo de las operaciones. Pero en muchos casos es posible que se queden fuera empresas cuyos ingresos se han desplomado por el sector de actividad al que pertenecen, y si la si-

tuación se prolonga, pueden pasar muy rápidamente de la iliquidez a la insolvencia (por ejemplo, los ligados al turismo que parten de niveles de liquidez y solvencia reducidos). En esos casos, los préstamos participativos concedidos directamente a las empresas podrían, ante la no devolución, convertirse en capital de las empresas.

- El regreso a cierta normalidad en las actividades productivas se debe producir al ritmo que las condiciones sanitarias lo permitan, pero los riesgos de contagio asociados a la vuelta a la actividad pueden no ser elevados si se toman las medidas de prevención adecuadas. Es importante aplanar la curva de contagios del coronavirus, para también aplanar la curva de desaparición de empresas y puestos de trabajo.

- Dado que los desplazamientos laborales representan un porcentaje reducido del total de movimientos, y teniendo en cuenta que cada comunidad autónoma presenta características diferenciales en cuanto a impacto y control de la pandemia, y presión sobre el sistema sanitario, la desescalada debe empezar cuanto antes de forma diferencial por autonomías, ampliando la lista de actividades permitidas y limitando la recesión allí donde sea posible.

- Para paliar los problemas de liquidez de muchas empresas es necesario que las Administraciones Públicas reduzcan los periodos de pago a sus proveedores y el volumen de deuda comercial pendiente (68.000 millones de euros), y contabilicen y paguen las facturas que están en el “cajón”, en las que se incumplen de facto los plazos de pago que marca la ley de morosidad.

- Para que las comunidades autónomas puedan hacer sus pagos, el Estado debe adelantar recursos del sistema de financiación, flexibilizar el compromiso de déficit público –haciéndolo asimétrico cuando lo justifique los menores niveles de ingresos de las comunidades– y facilitar cuanto antes el acceso al FLA extraordinario. Hay que evitar que las injusticias que plantea el actual sistema de financiación autonómico agraven la situación de las regiones infrafinanciadas. El Estado no tiene problemas en el acceso a la liquidez (gracias en gran parte al BCE) y debe practicar con las autonomías la solidaridad que reclama en Europa, más aún con las que nadie discute que están infrafinanciadas.

- Hacer frente a semejante crisis exige una política fiscal expansiva que va a pasar una enorme factura en el déficit y la deuda pública. Nadie discute su necesidad, pero no por ello hay que olvidar la importancia que tiene estimar los efectos de las medidas con sus correspondientes memorias económicas. Más aún si tenemos en cuenta que nos enfrentamos a esta crisis desde una mala posición de partida, ya que el déficit público cerró 2019 en un nivel que es el segundo más elevado de la zona euro.

Joaquín Maudos, catedrático en la Universidad de Valencia, dtor. adjunto de Ivie y colaborador en Cune; Francisco Pérez, catedrático de la Universidad de Valencia y director del Ivie

Solidaridad versus discriminación



Miguel Ángel Moratinos

La crisis del Covid-19 ha devuelto a la actualidad las dramáticas imágenes y trágicas consecuencias de la denominada “gripe española” de 1918, que en realidad surgió en Kansas (Estados Unidos) y no en España, pero que pasó a denominarse así y a asociarse paradójicamente con nuestro país porque el estatus no beligerante de España en la Primera Guerra mundial permitió a nuestros medios informativos difundir con mayor detalle las noticias sobre esta pandemia devastadora. Hasta ahora era la mayor pandemia que había conocido la humanidad, con más de 50 millones de víctimas mortales en todo el mundo.

Mirando hacia atrás, deberíamos extraer algunas lecciones para no recaer en los errores del pasado. En estas líneas me voy a centrar en algunas de las consecuencias geopolíticas, socioeconómicas y culturales a la hora de reconstruir nuestro *modus vivendi* nacional e internacional. El debate está ya abierto ante las declaraciones y actitudes xenófobas y discriminatorias que hemos podido observar durante las últimas semanas.

La tentación de llamar al Covid-19 el “virus chino” ha sido la primera alerta de no caer en el error de obviar que el virus tiene una proyección universal. Afortunadamente, todo parece indicar que ha prevalecido el sentido y rigor científico y la voluntad solidaria para usar la denominación científica del Covid-19. En cualquier caso, cuando esta crisis termine podremos hacer una crítica de los errores y de la falta de transparencia que hayan podido producirse al prevenir y alertar sobre los riesgos de esta pandemia por parte de los distintos actores.

Por otra parte, en este mundo en fase de transición, el Covid-19 ha permitido resucitar teorías conspiratorias a cargo de pseudopolíticos que nos han presentado escenarios rocambolescos en donde diversos actores bajo las instrucciones de los *big brothers* habrían decidido producir y transmitir este virus para ganar la batalla por la hegemonía mundial. Sin embargo, hoy más que nunca, como bien proclaman la OMS y el secretario general de la ONU, lo que se necesita es una reforzada solidaridad internacional que haga realidad una cooperación real y efectiva entre los distintos actores que deben hacer frente a esta pandemia.

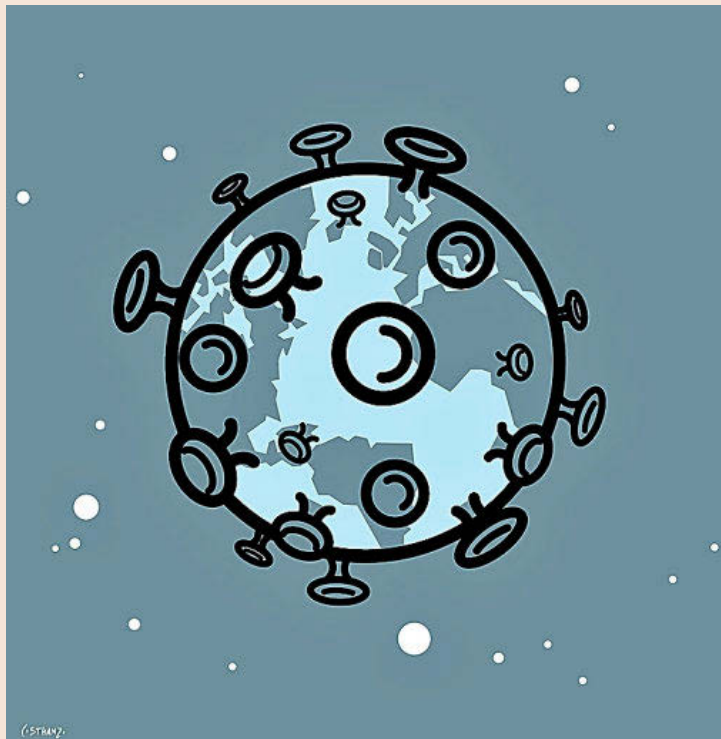
Las recientes reuniones telemáticas del G-20 y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas proporcionan cierta esperanza de que al final se conseguirá lograr esa coordinación necesaria. No obstante, es preocupante que el Consejo de Seguridad haya tardado casi más de cuatro semanas en reunirse por diferencias e incomprensiones entre los cinco miembros permanentes. En su condición de máximo órgano responsable del mantenimiento de la paz y seguridad internacional, el Consejo de Seguridad debería reunirse de forma automática cuando se presenten nuevos desafíos como la crisis actual que ponen en riesgo el orden internacional. Esta respuesta inmediata podría contribuir a la tan deseada reforma de este órgano esencial de la archi-

tectura mundial. La falta de solidaridad y la descoordinación tiene también una lectura en el ámbito nacional, socioeconómico y cultural.

Proteger a los más pobres y marginados

No podemos ni debemos permitir que los efectos de la pandemia sean especialmente virulentos en los sectores más pobres y marginados de la población (la tendencia creciente de casos entre la población afroamericana en Estados Unidos es digna de resaltar). Tampoco deberíamos olvidarnos de las inquietudes y los interrogantes del propio secretario general sobre el posible impacto del virus en el continente africano. Son inaceptables las declaraciones de algunos médicos franceses sobre la posibilidad de experimentar los efectos secundarios de posibles fármacos en poblaciones africanas. Además, no podemos ni debemos aceptar que esta crisis permita comportamientos racistas y discriminatorios, ni que la crisis contribuya a exacerbar las desigualdades.

Pero, en cambio, sí podemos y debemos contribuir a la creación de una estrategia de futuro. Es por ello que, junto a mi compañero y amigo, el asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la prevención del genocidio, Adama Dieng,



lanzamos un llamamiento a líderes religiosos y a la sociedad civil para fomentar la “solidaridad, compasión y unidad” necesarias para superar la crisis, y a fin de combatir todos los brotes de racismo, discriminación y xenofobia.

Esta solidaridad no debe ser solamente una solidaridad “declarativa”, como la que estos días todos proclamamos y aplaudimos con entusiasmo desde nuestros balcones, sino una solidaridad real que será más difícil de expresar cuando salgamos de nuestra cuarentena.

¿Cómo traduciremos esta solidaridad “declarativa” en solidaridad “practicada”? ¿Cómo nos comportaremos? ¿Habremos comprendido que sólo de manera solidaria y colectiva podremos hacer frente a la nueva compleja realidad nacional e internacional? ¿Nos volveremos de nuevo egoístas y nos quedaremos encerrados en nuestra “casa interior” o buscaremos entre todos cómo construir una “casa común” en la que cada uno de nosotros pueda encontrar las condiciones para alcanzar sus aspiraciones con dignidad y justicia? Este será, creo yo, el mayor reto de la humanidad.

Alto Representante de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas